



‘La izquierda para un país que lucha’

Estrategia IU 19/20

Coordinadora Federal de IU – 13/01/2019

1. Introducción

En la XI Asamblea Federal aprobamos una estrategia política que podría resumirse en cuatro ejes: ruptura democrática, unidad popular, radicalidad democrática y presencia en el conflicto. Han transcurrido ya dos años y medio desde junio de 2016 y consideramos necesario evaluar esta estrategia a la luz de lo sucedido durante todo este tiempo. Presentamos este documento con el objetivo de que este debate llegue a toda la militancia de Izquierda Unida, en la creencia de que un debate socializado permite mayores aciertos.

2. Situación política y «ruptura democrática»

En la última Asamblea diagnosticamos que el momento político de nuestro país era el propio de una crisis de régimen. Con ello nos referíamos a que el sistema político y sus diferentes instituciones sufrían una deslegitimación de tal profundidad que la propia configuración concreta de la democracia en España estaba amenazada, y que al mismo tiempo se abrían nuevas opciones para rediseñarla y sustituirla. Naturalmente, ni había ni hay nada preestablecido acerca de cómo serán esas opciones, ya que esa «brecha» puede utilizarse por ejemplo tanto para profundizar la democracia como para liquidarla.

Entre las diferentes causas que explican este descenso de la legitimidad institucional debemos destacar dos. La primera, la pérdida de soberanía de los parlamentos y de las instituciones representativas -percibidas como de cada vez menor utilidad-, enfermedad que afecta desde hace décadas a la totalidad de las democracias representativas europeas. En segundo lugar, y muy especialmente, la crisis económica que ha supuesto, mediante la acción de las instituciones (Gobierno, Justicia, Parlamento...) una brutal transferencia de recursos desde abajo hacia arriba, desde las familias trabajadoras y las clases populares hacia las elites económicas y el capital financiero¹.

Como consecuencia de la confluencia de estas causas y de otras ya analizadas en la XI Asamblea, en los últimos años se han sucedido una serie de importantes fenómenos

¹ En noviembre de 2018 el Banco de España dio por perdidos 42.017 millones de euros en el rescate financiero, aunque esa cantidad puede incrementarse en los próximos años.

sociales y políticos: huelgas generales, el estallido del movimiento 15-M y de otros movimientos sociales vinculados a la protección de los sectores más golpeados por la crisis, el surgimiento de nuevos actores políticos y el final del sistema político bipartidista, la abdicación de Juan Carlos de Borbón, las crisis políticas en el seno de los partidos políticos tradicionales, la agudización del conflicto territorial y la fortaleza de las movilizaciones feministas que incluían una convocatoria de huelga general, entre otros. Todos estos fenómenos están redibujando constantemente el terreno de juego político de nuestro país, sin que hayamos abandonado ni la crisis de régimen que los ocasiona ni la enorme volatilidad a la que ello da pie. Más recientemente, de hecho, se han sucedido nuevos eventos, como la irrupción de la extrema derecha, que han vuelto a rediseñar de forma notable el escenario político.

Pero, como hemos dicho, la crisis de régimen no supone en absoluto una garantía de que el futuro venidero sea positivo para las clases populares. Ello depende en última instancia de la correlación de fuerzas políticas. Y esto es algo que va cambiando en el tiempo. De hecho, mientras en el año 2014 esta correlación de fuerzas parecía favorable a la izquierda transformadora, en un contexto dominado por las preocupaciones sociales, en el presente parece que nos encontramos ante una reactivación de las derechas, en un contexto distinto dominado por las cuestiones nacionalistas.

Así, la evaluación de nuestra estrategia política ha de hacerse a la luz de estos cambios recientes en la correlación de fuerzas. Cuando hace dos años aprobamos nuestra estrategia de «ruptura democrática» pensábamos en que era necesario construir un «bloque histórico», es decir, un conjunto de alianzas sociales y políticas, que permitiera construir en nuestro país nuevas instituciones de signo favorable a las clases populares. Este horizonte no ha desaparecido y sin duda sigue siendo necesario construir ese «bloque histórico», pero la situación política sugiere que hacerlo es más complicado hoy que hace unos años.

En nuestro país esas nuevas instituciones, que refieren a una recuperación de la soberanía popular y a la democratización de la economía, pueden venir por la reforma integral de la Constitución de 1978. Aquella Constitución fue el resultado del impulso democratizador del movimiento obrero, pasado por el tamiz de las demandas de la oligarquía franquista que, no sólo negociaba en la mesa, sino que también marcaba la agenda política a través de su presencia en todas las instituciones (desde el ejército hasta los medios de comunicación, pasando por la violencia y represión en la calle). Hoy, cuarenta años después, es evidente que los derechos sociales recogidos en aquella Constitución son sistemáticamente incumplidos, mientras que los llamamientos a la defensa del «orden constitucional» refieren únicamente a las cuestiones que formaron parte de la intransigencia franquista durante la Transición, a saber, la propiedad privada de los medios de producción, la predominancia del mercado como criterio rector de la vida, la monarquía y la *sacrosanta* unidad de España.

Hoy, muchos de los que se dicen «constitucionalistas» miran hacia otro lado ante el incumplimiento de artículos como el 31, 35, 47 o 128 (progresividad fiscal, trabajo, vivienda o interés económico general), por poner sólo algunos ejemplos, y se limitan a interpretar la Constitución en clave reaccionaria -atendiendo únicamente a lo que fue la agenda de las fuerzas franquistas. Esta misma percepción fue precisamente la que hizo que hace más de veinte años, en 1996, Julio Anguita dijera como secretario general del PCE, partido sin el que no se entendería ni la Constitución ni la democracia en España, que «ante la creciente

degradación de la Democracia y de la Justicia Social, el PCE se considerará libre de consensos y denunciando el incumplimiento de los demás pondrá en la primera línea de su propuesta contenidos y fórmulas de Estado enraizados en nuestra teoría política, en nuestra historia y en algo muy importante: nuestra cultura y nuestros sentimientos». Aquel discurso, luego cristalizado en documentos orgánicos tanto en el PCE como en IU, supuso una ruptura con la tradición inmediata anterior por la que ambas organizaciones se comprometían con toda la formulación de la Constitución (incluyendo la monarquía y los símbolos nacionales) y no sólo con una parte. Desde 1996, PCE e IU han reivindicado el componente social de la Constitución al mismo tiempo que han apostado por nuevas instituciones, como la forma republicana de Estado, que necesariamente implicarían un nuevo proceso constituyente.

Por lo tanto, nuestra apuesta por la «ruptura democrática» tiene raíces ideológicas y orgánicas. Ahora bien, en ningún caso esta «ruptura» supone considerar la Constitución de 1978 como un producto negativo *per se* o como un simple efecto de una conspiración franquista. Es, sencillamente, el resultado de una correlación de fuerzas histórica que manifestó la pujanza democratizadora del movimiento obrero organizado pero también la solidez de las fuerzas franquistas que supieron preservar importantes espacios de influencia social y política.

Por otra parte, con el paso del tiempo la Constitución ha sido leída cada vez más en clave reaccionaria no sólo por los partidos políticos sino también por instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional. Ejemplo no muy lejano de ello es la sentencia de dicho Tribunal que suspendió la ley de la función social de la vivienda promovida por IU en la Junta de Andalucía en 2013. En definitiva, la derecha política y social no sólo ha ignorado en la práctica aquellas disposiciones sociales de la Constitución que tienen su origen en la fuerza del movimiento obrero, sino que también ha sido capaz de hegemonizar su lectura reaccionaria de la misma. Ello puede explicar por qué actores políticos que votaron en 1978 en contra de la Constitución, como José María Aznar, se hayan convertido con el tiempo en «constitucionalistas».

En esas circunstancias, lo que debemos evaluar no es el significado histórico de la Constitución de 1978 y sus instituciones -el llamado régimen del 78- sino la capacidad real que tenemos en este momento de conseguir superarlo de acuerdo a nuestros principios y valores. Y, como decíamos antes, hoy el clima político parece hacer más difícil que podamos lograrlo a corto plazo.

Sin embargo, la crisis de régimen sigue abierta. Puede decirse que instituciones supranacionales como la Unión Europea fueron las primeras en superar la Constitución de 1978 en la práctica, vaciando de contenido aquellas conquistas que eran incompatibles con el modelo neoliberal que se estaba construyendo desde, al menos, el acuerdo de Maastricht en 1992. Como hemos apuntado, es muy probable que todo ello haya afectado enormemente a la legitimidad del sistema político español, cada vez más considerado como inútil e incapaz. Es precisamente ante este proceso frente al que IU y el PCE respondieron en términos constituyentes, como acabamos de resumir.

Sin embargo, recientemente la impugnación de la Constitución ha venido también desde distintas posiciones políticas. Por un lado, el movimiento independentista ha roto también

con la Constitución de 1978 por entenderla incompatible con sus actualizados objetivos políticos. Por otro lado, la derecha española se ha desplazado hacia posiciones que ya no se limitan a defender una visión reaccionaria de la Constitución sino que van más allá e incluso defienden la supresión de gran parte de su arquitectura institucional (como la organización territorial, apostando hacia mayor centralismo).

En definitiva, la Constitución de 1978 está agotada, hace aguas y su reforma se presenta a casi todos los actores políticos como un proceso inaplazable. Lo que está en discusión es hacia dónde se encaminará esa reforma y a través de qué mecanismos se producirá. El camino está repleto de riesgos para todos los actores, no sólo por la volatilidad política característica de este tiempo y que hace imposible predecir escenarios seguros sino sobre todo porque la propia Constitución de 1978 es imposible de modificar seriamente sin tocar todos sus pilares constituyentes. Y *abrir el melón* implica asumir enormes riesgos que en este momento parecen inasumibles incluso para muchos actores que ya han diagnosticado la necesidad de introducir modificaciones importantes en la Constitución.

Además, la correlación de fuerzas actual no ayuda a esclarecer el camino. Si bien hoy es más difícil que hace unos años que se produzca una «ruptura democrática», esto es, un proceso constituyente dirigido desde abajo y que ponga las instituciones al servicio de las clases populares, hoy tampoco es fácil alcanzar un pacto reformista que consiga hacer cambios menores al tiempo que se preservan los rasgos fundamentales del régimen del 78. La realidad política está cruzada tanto por el vector social como por el vector nacional, lo que produce un escenario endiablado de bloqueo político respecto a este asunto de la reforma constitucional y el futuro del país.

Por un lado, actualmente hay una exigua mayoría parlamentaria comprometida con una senda de diálogo y negociación para abordar la cuestión territorial, pero que es incapaz de llegar a acuerdos ambiciosos en materia social. Por otro lado, existe un creciente bloque reaccionario que se cohesiona en torno a una lectura centralista y uniformizadora de la cuestión territorial y una lectura neoliberal de la cuestión social. Aun así, ninguna de estas dos posiciones es mayoritaria a día de hoy.

El movimiento independentista está actualmente sumido en el desconcierto tras ponerse de relieve que su estrategia de construcción de una república catalana era poco más que humo y que detrás de la retórica de sus dirigentes no había ningún intento serio de cambiar la realidad política. Desde entonces ha sido incapaz de cohesionar a su heterogénea base social de forma distinta a la que proporciona el victimismo frente a la actuación de las instituciones del Estado (que ha sido, en gran medida, excesiva y descontrolada).

La derecha, por su parte, es víctima de sus excesos. Comenzó siendo un actor y ya son tres tras el surgimiento de un nuevo partido desde las entrañas del PP. En definitiva, políticamente no hay mayorías claras ni tampoco fáciles de articular y consolidar, mientras que los movimientos tectónicos en la sociedad podrían seguir cambiando radicalmente el escenario político.

Todo está abierto.

En estas circunstancias, ¿cuál debería ser el papel de Izquierda Unida? A nuestro juicio, **el principal objetivo debe ser avanzar en la construcción de un bloque histórico que se comprometa con carácter urgente a poner en marcha una propuesta que parta de las necesidades de las familias trabajadoras e impida la consolidación de un bloque reaccionario con mayoría suficiente como para acabar con las conquistas sociales y democráticas.** Esa circunstancia abocaría a nuestro país a una regresión social y política sin igual en los últimos cuarenta años. Es decir, debemos trabajar activamente para evitar que la tríada compuesta por PP, CS y VOX pueda disponer de una mayoría parlamentaria y social capaz de poner en marcha su proyecto reaccionario como ya está sucediendo en Andalucía. Los resultados de las elecciones en Andalucía pusieron de relieve que aquella victoria reaccionaria fue posible fundamentalmente debido a la desmovilización de la izquierda, lo que es tanto nuestra responsabilidad como nuestro próximo reto. Si somos capaces de actuar bien seremos también capaces de conseguir una base social suficiente que nos permita no sólo crecer sino también frenar las posibilidades de los partidos reaccionarios.

Una apuesta razonable por la «ruptura democrática» debe comprender que no se trata sólo de sumar voluntades en el campo electoral sino que la tarea pasa, sobre todo, por construir un imaginario social que apunte a la necesidad de nuevas instituciones políticas. Es decir, para que la «ruptura democrática» sea posible es un requisito necesario que las clases populares vean en ella una opción necesaria y útil para mejorar sus vidas. Y esto es algo en lo que no se ha abundado lo suficiente en los últimos años. Es evidente que situaciones como la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre hipotecas o las filtraciones de grabaciones sobre las «cloacas del Estado» han puesto de relieve la importancia de disponer de instituciones democráticas y transparentes que no se plieguen ante intereses particulares, reaccionarios o del capital financiero. Pero de momento el tránsito desde la crítica destituyente o *anti-establishment* a la crítica constituyente está siendo insuficiente.

De igual forma, **nuestro papel ha de consistir también prioritariamente desvelar las contradicciones del espacio de la socialdemocracia**, cuyos viejos liderazgos han sido responsables de este vaciamiento de la Constitución y también de la reciente crisis económica, y evitar de ese modo que la socialdemocracia apueste por una salida reformista en alianza con actores como Ciudadanos. Este intento, que fracasó en la primavera de 2016, en gran parte debido a nuestra determinación en no aceptar esa fórmula como salida de la crisis, forma parte de las intenciones políticas de algunos actores económicos y políticos, por ejemplo de los viejos dirigentes del PSOE. Aunque ahora mismo parece una opción compleja, especialmente por el posicionamiento político de Ciudadanos, no es descartable en absoluto y mucho menos a medio plazo. Por ende, es mucho más inteligente buscar acuerdos con la socialdemocracia que permitan avanzar en materia social al tiempo que neutralicen las opciones reaccionarias o reformistas, siempre sobre la base de compromisos programáticos y con la declarada intención de llevar a cabo medidas que, por un lado, mejoren la vida de la gente y, por otro, avancen en la democratización de la economía y de la sociedad. Este camino no está exento de riesgos y de otras contradicciones para nuestro espacio político, como es evidente, pero entendemos que es el que procede en un contexto social y político como el actual.

En consecuencia, y a pesar de las dificultades, **no renunciamos a nuestra apuesta por la «ruptura democrática». El escenario está tan abierto y es tan volátil que también cabe la posibilidad de que los cambios hagan oscilar el tablero social y político hacia la**

izquierda. Ello depende, como hemos mantenido, de nuestra capacidad de intervención sobre dichos cambios. Lo que es evidente, por otra parte, es que el estado actual de las cosas no sólo no puede durar sino que con el tiempo se pudre aún más. Los intentos de preservar el régimen del 78 sin reformas sólo permiten ganar tiempo, pero a un coste elevado que implica la agudización del conflicto y la extensión de las críticas destituyentes. En esas circunstancias, nuestra organización debe estar preparada para cualquier eventualidad, sin descartar ningún escenario pero haciendo todo lo posible para crear las condiciones adecuadas para una «ruptura democrática».

3. Situación de las confluencias y la «unidad popular»

Otra de las apuestas de la XI Asamblea fue la «unidad popular» concebida de una forma no exclusivamente electoral. Se trata de construir un «bloque histórico», esto es, una alianza social y política comprometida con un proceso de ruptura democrática en nuestro país.

La situación de crisis económica y de crisis política implica la necesidad de preservar las libertades y derechos que están siendo amenazados por la política neoliberal. Entendemos que la mejor forma de hacerlo es a través de la unidad política. No obstante, no se trata únicamente de una posición defensiva sino que aspiramos también a extender los derechos y las libertades de las clases populares más allá de lo que ya se había conquistado. Siendo la democracia un proceso más que un *estado*, lo que queremos es profundizar la democracia. Esto significa extender la propiedad pública y democrática a bienes y servicios fundamentales para la vida y para la sostenibilidad del planeta, y que a día de hoy son privados y regidos por la irracional ley del mercado. Hablamos no sólo de la educación, la sanidad, las pensiones, servicios sociales u otras prestaciones sociales sino también de las infraestructuras, la energía, la vivienda y el sistema financiero, por ejemplo. Y para poder lograr esos objetivos no cabe duda de que la fuerza de nuestra organización política ha sido hasta hoy históricamente insuficiente: es por lo tanto necesario la unidad con otros actores sociales y políticos.

Aunque la unidad electoral no agota la «unidad popular», no cabe duda de que es un eje central que, además, está sujeto a una alta exposición mediática. Sería un error por nuestra parte considerar que como el objetivo es la «unidad popular» en sentido amplio no debemos atender su parte institucional. Además, los resultados electorales y los comportamientos en este ámbito proporcionan señales relevantes sobre el grado de apoyo y simpatía que genera la unidad popular en su conjunto.

Nuestra organización política ha defendido desde sus orígenes la confluencia electoral con otras fuerzas con las que compartimos proyecto político. De hecho, nuestra organización se fundó en 1986 directamente como una coalición de partidos y, desde entonces, siempre hemos trabajado para sumar a otras fuerzas del espectro político de la izquierda transformadora, es decir, a la izquierda de la socialdemocracia representada por el PSOE. La única diferencia con el proceso devenido a partir de 2014 es que desde esa fecha nuestra organización dejó de ser la más grande -electoralmente hablando- en esas coaliciones. Este hecho, de notables implicaciones subjetivas para nuestra organización, no

ha modificado ni un ápice la apuesta estratégica por la unidad electoral con otras fuerzas políticas.

La unidad electoral tras 2014 ha mostrado resultados muy dispares. En las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 no se logró acordar ninguna confluencia autonómica pero nuestra organización organizó y participó en numerosas experiencias de confluencia en bastantes municipios. No obstante, las formas y contenidos de esas confluencias fueron muy asimétricas y dependieron de las singulares características municipales. En todo caso, en las principales ciudades del país -por número de habitantes- los procesos de confluencia lograron éxitos muy relevantes que permitieron alcanzar no pocas alcaldías (caso de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santiago y A Coruña, por ejemplo). Otros gobiernos municipales de capitales de provincia también contaron con la presencia de IU, fuera a través de candidaturas en solitario, caso de Zamora, o tras pactos postelectorales con Podemos, caso de Cádiz, o con el PSOE, caso de Córdoba, Valladolid o Alicante -en este último en candidatura de confluencia-. El entramado de candidaturas para aquellas elecciones municipales fue sumamente complejo y heterogéneo, pero los buenos resultados cosechados atrajeron la mayor parte de la atención. En las comunidades autónomas, sin embargo, los resultados fueron mucho más modestos para todas las fuerzas de la izquierda transformadora o rupturista. En ningún caso Podemos logró superar al PSOE y en no pocas comunidades nuestra organización se quedó fuera del parlamento (casos de Madrid, Extremadura, Murcia o Valencia).

La primera experiencia de confluencia autonómica tuvo lugar en septiembre de 2015 en Cataluña, y la candidatura «Catalunya si que es pot» se quedó por debajo de lo que había obtenido la candidatura de «ICV-EUiA» tres años antes. Entonces se consideró que la actualidad y fuerza del proceso independentista había sido la principal explicación de aquel descenso electoral. Luego vinieron las confluencias de Cataluña y Galicia en las elecciones generales de diciembre de 2015, que coincidieron con la competición electoral entre IU y Podemos en el resto del país. En aquel momento la candidatura de confluencia «En Comú Podem» ganó las elecciones en Cataluña mientras que la candidatura de confluencia «En Marea» quedó en segundo lugar en Galicia. En ambas candidaturas nuestras organizaciones estaban integradas, obteniéndose dos escaños para IU en Cataluña y uno más en Galicia. En el resto del país IU obtuvo un 3,67% y dos escaños por la circunscripción de Madrid.

Para las elecciones generales de junio de 2016, la confluencia ya tuvo lugar en todo el país. Entonces los resultados no fueron los que se esperaban y la candidatura de confluencia «Unidos Podemos» obtuvo casi un millón de votos menos que lo que sumaron por separado en la anterior convocatoria electoral los votos de IU y Podemos. A pesar de ello, los escaños totales se mantuvieron y de hecho IU incrementó su representación hasta 5 escaños en el Congreso (más los tres de las confluencias) y otros 2 en el Senado.

En septiembre de 2016, apenas unos meses después, tuvieron lugar las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, en las que también hubo candidaturas de confluencia. En ambos casos se logró cosechar buenos resultados y en ambos casos se logró un resultado superior al obtenido por el PSOE. En diciembre de 2017 hubo también elecciones autonómicas en Cataluña en un clima aún más marcado por el independentismo y la

candidatura de confluencia «Catalunya en comú» obtuvo sólo 8 escaños, tres menos que los de las anteriores elecciones.

Desde las últimas elecciones generales las encuestas han marcado un descenso progresivo del apoyo electoral al espacio político de confluencia tanto en el conjunto del país como en las diferentes comunidades autónomas. En diciembre de 2018 las elecciones autonómicas en Andalucía han vuelto a mostrar un resultado ambivalente para la confluencia. En este caso la candidatura de confluencia «Adelante Andalucía» ha perdido unos 300.000 votos respecto a la suma de votos por separado de Podemos e IU en los anteriores comicios. A pesar de ese notable descenso, que supone casi un tercio del total, la representación institucional sólo se ha reducido en tres escaños y, para el caso de IU, se ha mantenido en cinco diputados autonómicos. Sin embargo, el resultado global para la izquierda andaluza ha sido desastroso porque los tres partidos de la derecha reaccionaria han logrado mayoría absoluta.

Estas circunstancias precedentes son las que condicionan la reflexión sobre la eficacia de la unidad electoral en el presente y de cara al futuro. En todo caso, la disparidad de resultados sugiere que las causas son más complejas de lo que podría parecer. Por ejemplo, entre septiembre de 2015 y diciembre de 2015 apenas mediaron tres meses y las candidaturas de confluencia en Cataluña pasaron de obtener el 8,94% en las autonómicas a conseguir el 24,74% en las generales. Parece evidente que la confluencia no puede ser en sí misma la explicación a dicho comportamiento, ya que se produjo en ambos casos. Otras variables como los participantes de la confluencia, el tipo de campaña, los candidatos y candidatas y, sobre todo, el contexto sociopolítico han podido tener una mayor importancia. En el caso catalán, como hemos indicado, la fuerza del movimiento independentista en las elecciones autonómicas, que condiciona con claridad la agenda política en campaña, es una de las grandes causas.

Por eso sería injusto atribuir a la confluencia el descenso electoral respecto a 2015, en aquellos casos en los que se ha producido como en las últimas generales o en las andaluzas. Entre las convocatorias de referencia han pasado muchas cosas que han podido alterar la composición de voto de algunas o todas las partes de la confluencia, como demostramos en el informe anual de 2017 para el caso de las elecciones generales de junio de 2016. En aquella experiencia fue de importancia decisiva el hecho de que Podemos había perdido una gran cantidad de votos entre enero de 2016 y abril de 2016 por causas ajenas a la confluencia. No obstante, también es cierto que existen tanto en Podemos como en IU sectores refractarios a la unidad electoral y que podrían optar por votar a otros partidos o incluso abstenerse. Ese movimiento podría, a su vez, ser compensado o mitigado por otro en dirección contraria, esto es, votantes de otros partidos o abstencionistas que se vieran atraídos por la confluencia electoral. Las transferencias entre partidos, por ejemplo en Andalucía, parecen indicar que ambos movimientos han existido si bien el primero ha tenido más fuerza.

En todo caso, el contrastado problema para la unidad electoral y también para la izquierda en su conjunto es que **se ha perdido voto de forma importante y, por ende, se ha sido incapaz de atraer votantes perdidos por el PSOE.** Entre 2015 y 2016 no sólo la suma de Podemos e IU perdió un millón de votos en las elecciones generales sino que el PSOE también perdió unos cien mil votos adicionales. En el caso andaluz, por ejemplo, a los

trecientos mil votos perdidos por «Adelante Andalucía» hay que sumar otros cuatrocientos mil votos perdidos por el PSOE de Andalucía. Es decir, en Andalucía las fuerzas de izquierdas han perdido en conjunto unos setecientos mil votos en tres años. Con respecto a 2015 la izquierda ha visto menguar su base social de una forma muy preocupante, y este es el principal reto que enfrentamos en los próximos meses y años.

En la recuperación y ampliación de esta base electoral **tenemos que ser capaces de identificar bien las razones por las que estas personas han dejado de apoyarnos**. En general detectamos dos pistas que funcionan como hipótesis y aun deben ser contrastadas. En primer lugar, en los últimos años **la agenda política nacionalista ha ocupado gran parte de la atención ciudadana, lo que ha perjudicado a proyectos no nacionalistas y más centrados en la cuestión social como el nuestro. A ello hay que sumar la dificultad de nuestro espacio para explicar su propuesta de país, que es tanto republicana como federalista**. Es probable que no poca gente se haya ido a la abstención desconcertada ante la posición poco clara, en este punto, de nuestro espacio político. **En segundo lugar, vemos con preocupación como nuestro espacio político está perdiendo transversalidad, es decir, capacidad de alcanzar a sectores sociales menos ideologizados** pero que en algún momento confiaron en fuerzas participantes de la confluencia, en particular en Podemos. Los datos de las últimas elecciones andaluzas, explorados con mayor nivel de detalle en el anexo, revelan que el tipo de votante de «Adelante Andalucía» se parece más al votante de IU de 2015 que al de Podemos de 2015. Este dato es positivo desde la óptica de nuestra organización, pues señala una gran fortaleza de nuestra base social, pero al mismo tiempo es un dato preocupante desde la óptica del espacio político conjunto porque señala unos límites de crecimiento que necesitamos superar. En este sentido, **debemos trabajar activamente para hegemonizar con nuestro discurso y política espacios sociales que son mucho menos ideológicos**.

Desde nuestra óptica, tal y como hemos dicho en otras ocasiones, **la confluencia electoral es parte de la «unidad popular» y por lo tanto es una estrategia irrenunciable**. Nuestro compromiso con la construcción de un «bloque histórico» es firme y está fundamentado en la necesidad de realizar cambios radicales en nuestro país en la línea arriba apuntada, esto es, de democratización de España. Pero especialmente importante es la unidad en momentos como los actuales, con la radicalización de las derechas españolas y el creciente clima de nacionalismo, si bien como tantas veces hemos indicado es necesario dar más protagonismo a la unidad no electoral, esto es, aquella unidad que se construye desde abajo y en el tejido social.

Todo esto no quiere decir que dicha unidad electoral sea obligatoria para el conjunto de nuestra organización, pues la casuística que se da en un país con más de 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas y 52 circunscripciones electorales es enorme. Una mirada atenta a las realidades singulares de nuestro país detectará con rapidez cuán complejas son las relaciones entre fuerzas de izquierdas en todo el panorama nacional. Nuestra apuesta unitaria es un objetivo estratégico que debe tratar de alcanzarse por parte de toda nuestra organización, pero nunca de forma totalizante y siempre atendiendo a los aspectos concretos de la realidad. De ahí que podamos felicitarnos por haber alcanzado en 2018 un acuerdo marco con Podemos que sirve de base para construir candidaturas de confluencia en toda España a partir del reconocimiento tanto de la apuesta estratégica por la unidad

como del reconocimiento de las situaciones singulares que pueden desaconsejar determinados procesos de unidad.

El objetivo de las próximas elecciones municipales será incrementar la presencia institucional de los y las militantes de IU, algo que consideramos factible a pesar del actual clima de nacionalismo y conservadurismo. Asimismo, el objetivo de las próximas elecciones autonómicas será también incrementar la presencia institucional de los y las militantes de IU, pero también muy especialmente **recuperar representación en aquellos parlamentos en los que desaparecimos en 2015 y conseguir representación en otros donde hace más tiempo que habíamos dejado de tenerlo.**

Esaños obtenidos en elecciones autonómicas (entre paréntesis las confluencias):

C.C.A.A.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Asturias	4				4	5			5			
Cantabria	0				0				0			
La Rioja	0				0				0			
Castilla y León	0				1				1			
Madrid	11				13				0			
Navarra	2				3				2			
Aragón	1				4				1			
P. Valencià	5 (7)				5				0			
Murcia	1				1				0			
Castilla-La Mancha	0				0				0			
Extremadura	0				3				0			
Canarias	0				0				0			
Baleares	0				0				0			
País Vasco			1			0				2 (11)		
Galicia			0			5 (9)				3 (14)		
Andalucía		6				12			5			5 (17)
Cataluña				2 (10)		3 (13)			1 (11)		1 (8)	
TOTAL	24*	30	31	33	43	62	62	62	20	20	20	20

(*) La suma inicial no incluye Cataluña, Andalucía, Galicia y País Vasco.

Ambos objetivos son mucho más fáciles de conseguir gracias al acuerdo marco de unidad electoral. Venimos de una situación muy complicada, en la que IU ha estado a poco de desaparecer, y poco a poco nos estamos recuperando. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que cualquier alternativa real por la izquierda en este país pasa por la participación activa de nuestra organización. De ahí que estemos siendo capaces de

recuperar fuerza institucional y social al tiempo que participamos en un espacio político que está resultando determinante para enfrentar las políticas de austeridad y, en el ciclo venidero, ponerle freno a la derecha reaccionaria.

4. Situación de IU, «radicalidad democrática» y «presencia en el conflicto»

Para cumplir con nuestros objetivos políticos en la última asamblea consideramos que era necesario hacer cambios en el modelo de organización. En particular, creímos necesario avanzar en la superación de IU como partido político clásico para poder disponer de una organización mucho más horizontal, democrática y transparente.

En ese sentido ya conseguimos que la última Asamblea Federal celebrada en junio de 2016 fuera la primera en la historia de IU en la que la elección de los órganos de dirección, incluyendo a su coordinador, fuesen elegidos directamente por la militancia a través del sufragio universal. Y en la reciente Asamblea por un Nuevo Modelo Organizativo, celebrada en 2018, aprobamos extender esa fórmula como un elemento obligatorio para toda IU. Gracias a ese proceso hemos ganado en participación política de la militancia en las cuestiones internas, ya que a partir de ahora la militancia toma las decisiones importantes de forma directa.

Además, hemos puesto en marcha mecanismos para la rendición de cuentas, entre los que está la presentación de informes anuales con numerosa información que hasta entonces estaba únicamente en manos de la dirección, y también para la revocación de cargos públicos. En definitiva, hemos defendido en todo espacio la existencia de una organización donde la militancia tiene siempre la última palabra y además dispone de la capacidad para corregir decisiones ya tomadas. Esta configuración nos aleja de la visión clásica de un partido político jerarquizado y con élites informales, y nos aproxima mucho más a la idea de un movimiento político y social que siempre hemos defendido en los documentos aprobados.

De hecho, siempre hemos defendido que IU debe ser un espacio político abierto, plural y amable para la participación política, capaz de sumar a toda aquella persona que comparta nuestro proyecto político. Por esa misma razón estos cambios organizativos no son ajenos a nuestra filosofía acerca de la «unidad popular», ya que ambos procesos apuntan en la dirección de sumar y multiplicar nuestras energías para transformar nuestra realidad social y política. De ahí también que hayamos defendido multiplicar los espacios de coordinación y comunicación con otras formaciones políticas con las que ya estamos aliadas electoralmente, a fin de que nuestras energías no se dediquen sólo a la cuestión electoral sino que permitan estrechar la colaboración también en otros ámbitos.

No obstante, **aunque una de nuestras apuestas de la última Asamblea Federal fue priorizar la presencia en el conflicto, hemos de reconocer que hemos tenido enormes dificultades para conseguirlo.** En realidad, la presencia de nuestra militancia en manifestaciones, convocatorias ciudadanas, huelgas y otras formas de protesta política ha sido siempre excelente. Contamos con una militancia de oro que ha estado implicada en

cada conflicto social, fuera social o laboral, poniéndose de lado de los sectores agraviados. Sin embargo, nuestro objetivo en la última Asamblea tenía más que ver con la capacidad de insertarnos en el tejido social, esto es, siendo capaces de construir redes y vínculos comunitarios que permitieran extender nuestro mensaje más allá de los círculos políticos convencionales (como es, por ejemplo, la televisión). Esta tarea intentamos llevarla a cabo con nuestra campaña contra la precariedad, pero los resultados no han sido satisfactorios y apenas hemos podido conseguir que pareciera una campaña más al uso.

Este objetivo de tener presencia en el conflicto se ha vuelto más acuciante con el contexto actual. Y es que aunque la extrema derecha ha conseguido entrar en las instituciones, de momento su perfil ideológico responde al de una derecha neoliberal radicalizada en términos nacionalistas y no ha logrado penetrar en los sectores populares que tradicionalmente han votado a la izquierda. Esto, no obstante, podría cambiar en el futuro. Y quizás la mejor manera de evitarlo es ampliando nuestra presencia organizada en los barrios obreros y en general en los lugares donde se produce la socialización de las clases populares. Dichos espacios de socialización no son únicamente los más tradicionales, como barrios, centros de trabajo y asociaciones de vecinos, sino que también lo son los medios de comunicación, viejos y nuevos, en los que la gente se forma su idea política. En las últimas décadas estos últimos espacios han crecido en importancia, y se trata de ámbitos como internet o televisión en los que se dan importantes batallas culturales en torno a las diferentes propuestas políticas.

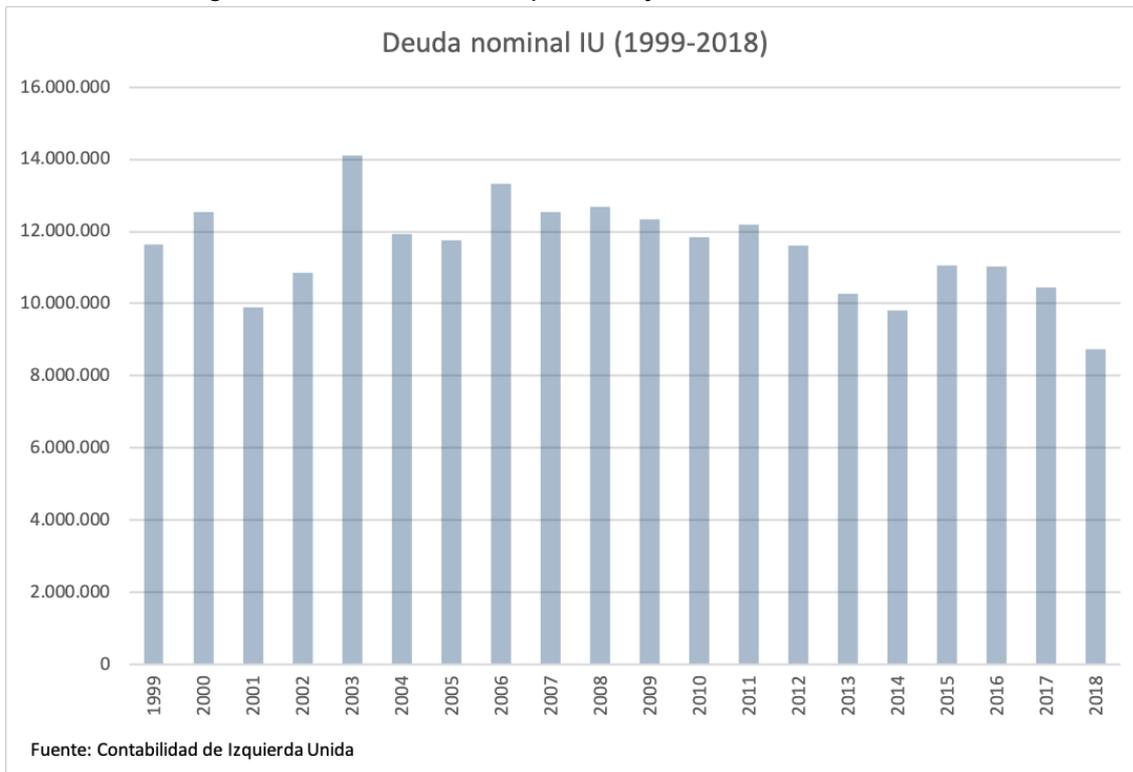
Desde el punto de vista de las tareas que nos impusimos en la última Asamblea Federal en relación a esta idea, es evidente que hemos logrado completar sólo algunos objetivos. Por ejemplo, nuestra presencia en internet es mejor que la que teníamos hace unos años pero aún estamos lejos de dar con la clave para atraer a millones de personas que usan habitualmente internet y que podrían ser potenciales defensores de nuestras ideas. La creación de una «comunidad», tanto virtual como física, parte de identificar bien los lugares en los que la gente hace vida, es decir, se relaciona, interactúa y comparte inquietudes políticas con otras personas. Aún no hemos sido capaces de poner en marcha este proyecto que aspira a interrelacionar a nuestra base social y a crear al mismo tiempo un espacio de comunicación directa entre nuestros votantes y nuestra organización. Otros espacios de socialización, como la música, la literatura, los videojuegos o las series, con sus correspondientes realidades materiales, apenas han sido tratados en nuestra política organizativa. El éxito del *Precarifest*, que este año hará su tercera edición, es un hilo del que tenemos que tirar con mucha mayor definición, siendo capaces de potenciar nuevos vínculos entre la música, el ocio y la política. Algo similar podría decirse del resto de ámbitos, habitualmente vinculados al ocio, y en los que el proyecto de la revista cultural *LaU* apenas está en estado embrionario.

En definitiva, notamos con preocupación cómo muchas de las ideas que tenemos teorizadas, con muy buenos fundamentos, apenas podemos ponerla en marcha al enfrentar determinadas dificultades, que la mayor parte de las veces no son de carácter conceptual o teórico sino de recursos. Y es que **la situación financiera de nuestra organización ha mermado de forma notable nuestra capacidad de acción política.**

La dirección emanada de la última Asamblea Federal, celebrada en junio de 2016, se encontró con una deuda de diez millones de euros y con una organización debilitada que

acababa de verse obligada a celebrar un expediente de regulación de empleo a principios de 2016. Esa circunstancia ha condicionado de forma dramática tanto el número de personas disponibles para el trabajo político como, especialmente, la capacidad de poner en marcha proyectos aprobados colectivamente. Hemos tratado de compensar esas insuficiencias con un trabajo político descomunal que nos permitiera cubrir todas las tareas posibles, tanto de presencia institucional como mediática y política en general, si bien tenemos que admitir que no siempre lo hemos conseguido. El esfuerzo financiero ha sido de tal calibre que **en dos años hemos conseguido reducir más del 20% el montante de la deuda, pero el coste político no ha sido menor.**

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la deuda total de IU desde el año 1999, cuando la deuda ya superaba los once millones de euros. Tras varios años con altibajos que sin embargo mantuvieron la deuda por encima de los doce millones de euros, desde el año 2008 se inició una clara tendencia descendente. Y al cierre del año pasado, 2018, por primera vez conseguimos reducir la deuda por debajo de los nueve millones de euros.



El esfuerzo por reducir la deuda nominal ha sido muy notable desde el año 2008, cuando bajo la coordinación del compañero Cayo Lara se tomó la decisión de comenzar a reducir de forma urgente un lastre de estas características. En efecto, el período que va desde la IX Asamblea hasta la XI Asamblea se redujo la deuda en más de un millón y medio de euros. Con la actual dirección, emanada de la última Asamblea, hemos conseguido en sólo dos años rebajar la deuda en dos millones trescientos mil euros. Además, esperamos que en los próximos meses logremos mejorar esos resultados. Hasta el momento, todo esfuerzo por reducir la deuda ha retraído las capacidades de acción política.

5. Propuesta política

Aunque todo lo apuntado aquí refiere a cuestiones de carácter estratégico, no podemos olvidar que se enmarcan en un contexto mucho más amplio de grandes transformaciones sociales, políticas y tecnológicas por las que atraviesa no sólo España sino todo el mundo. Nuestro país ocupa un rol periférico en el sistema-mundo tanto a efectos económicos como políticos, y eso condiciona el tipo de estructura productiva y estructura social, lo que a su vez marca el terreno de juego político.

Precisamente por eso no somos ajenos a transformaciones económicas y tecnológicas que, de la mano del neoliberalismo, están haciendo que cambie radicalmente el mundo del trabajo y, especialmente, el del derecho del trabajo. La precariedad laboral se ha convertido en una norma y no en la excepción, si bien nuestro país nunca disfrutó de un Estado social equiparable al de los países europeos más desarrollados. No obstante, esta precariedad va pareja tanto a un desplazamiento del espacio principal de socialización de los trabajadores, que pasa desde el centro del trabajo hacia espacios vitales más transversales como son los barrios, como también a una polarización económica y simbólica entre trabajos cualificados y trabajos sin cualificar. El efecto de la robotización, por ejemplo, previsiblemente agudizará esta dinámica.

De la misma manera, el populismo de extrema derecha que emerge en muchos países desarrollados, comenzando por Estados Unidos, están muy vinculados a la disputa por la hegemonía mundial. La guerra comercial iniciada por EEUU y China tiene efectos directos sobre la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, y no sólo sobre esos países. Igualmente, los apoyos que recibe la extrema derecha europea desde determinados poderes de EEUU guardan relación con el intento de estos poderes por preservar su hegemonía y, en concreto, dificultar el crecimiento de Alemania y la Unión Europea como un nuevo polo dominante.

Además, la crisis financiera internacional, iniciada en 2007 en EEUU y que luego se expandió por todo el mundo, ha dejado efectos permanentes en la mayoría de los países. No sólo se trata de la transferencia de recursos desde los sectores más pobres hacia los más ricos sino que ha sido una crisis que ha permitido consolidar el poder del capital financiero y de las grandes empresas, las cuales han aprovechado estas circunstancias para rebajar impuestos e incrementar sus beneficios mediante bajadas salariales. No obstante, las condiciones económicas mundiales son, en el mejor de los casos, enormemente precarias. La última crisis económica pudo superarse en parte, en términos macroeconómicos, gracias a las medidas heterodoxas planteadas por el Banco Central Europeo y otras instituciones internacionales, pero al coste de crear nuevas condiciones para futuros estallidos financieros y económicos. A ello debemos sumar otros efectos negativos que con causa en la crisis ecológica actual pueden aumentar las posibilidades de una nueva crisis internacional y nacional.

Todo ello debe formar parte de nuestro horizonte de pensamiento, pues cualquiera de esos eventos puede modificar de forma radical el escenario político español, como ya sucedió durante la última crisis económica. En definitiva, no podemos dejar de tener puestas las

luzes largas aunque sepamos que en este momento dependemos de unas buenas luces cortas.

Como consecuencia de muchas de esas transformaciones estamos viendo cómo la derecha reaccionaria ha radicalizado su discurso contra las conquistas sociales y los derechos civiles, particularmente las que tienen su origen en el movimiento obrero y en el movimiento feminista. Durante años el neoliberalismo ha consistido esencialmente en desmontar los sistemas de protección de los derechos de la clase trabajadora, y como decíamos la crisis ha servido para agudizar esta tendencia.

En los últimos años en todo el mundo puede comprobar cómo la derecha reaccionaria, desde Trump hasta Bolsonaro pasando por nuestra derecha nacional, han iniciado una dura batalla contra las conquistas feministas. Ello pone de relieve, entre otras cosas, el carácter reaccionario tradicionalista de sus proyectos políticos, pero también la fuerza emancipadora del movimiento feminista no sólo para las mujeres sino para la condición humana. En este sentido, frente a las voces reaccionarias que recomiendan dejar de lado las demandas feministas **nuestra organización debe contribuir a fortalecer el movimiento feminista para que sea capaz no sólo de defenderse de la reacción derechista sino para que también pueda abrir nuevos horizontes de libertad en nuestro país.**

Otro de los cambios sustantivos en los últimos tres años ha sido **la reducción de la movilización social, en comparación con la del ciclo que va de 2011 a 2015.** A pesar de que el mayor problema del país es la precariedad laboral y vital de millones de personas (un 86% de las familias no pueden ahorrar, un 56% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, el paro sigue en cifras escandalosas, el precio de la vivienda aboca a vida hipotecadas...) la agenda política y mediática se ha centrado en el conflicto con Cataluña y en la agenda parlamentaria.

La lucha contra la precariedad ha de ser el centro de nuestra acción política. La demanda de mejores salarios y una fiscalidad justa es fundamental. En un país donde más del 90% de los contratos que se forman es de carácter temporal, el problema que une a la mayoría de la población es la inseguridad vital. Cambiar la agenda política impulsando debates, acciones, conflictos y propuestas en torno a la mejora de las condiciones de vida es la vía para reconectar a los millones de personas que se han alejado de la política, bien por decepción, bien por no ver reflejado sus intereses en el debate político. En cada barrio y en cada pueblo hemos de detectar la precariedad y organizarla, desde la falta de servicios públicos (o su privatización), al inmenso problema de la vivienda o la lucha por salarios dignos. Las situaciones conflictivas están ahí y si no ayudamos a canalizarlas en favor de un cambio positivo para el pueblo, puede estallar la rabia de otras y más dañinas maneras. Además, continuaremos luchando por la derogación de las dos últimas reformas laborales y nos sumaremos a las campañas que, en esta línea, se convoquen por parte de los sindicatos de clase.

Por otra parte, el aspecto más positivo acaecido en España ha sido y es el impulso del movimiento feminista, que ha sido capaz de visualizar la violencia y las injusticias contra las mujeres y de poner un espejo en el que mirarnos para ser mejores. **Hoy, el feminismo, como acción y como visión del mundo, ha de incorporarse con más fuerza en el ideario y objetivos de IU.** El feminismo nos obliga a cambiar y a poner en la agenda no

solo los problemas de las mujeres, sino a las mujeres mismas sin cuyo protagonismo no se puede construir no ya el feminismo sino una propuesta de país que nos incluya a todas y que sea percibida por las millones de mujeres que han salido a las calles. Además, la extrema derecha en todo el mundo ha situado a las mujeres y sus derechos como un objetivo a combatir. En ese sentido, la construcción de una amplia alianza democrática que incluya de forma fundamental el feminismo es un objetivo aún más necesario.

Hemos planteado también, en las páginas anteriores, **la necesidad de definir bien nuestro proyecto de país**. En la tradición de nuestra organización, el programa político es siempre lo primero. A partir de dicho programa valoramos las alianzas políticas y los acuerdos de gobierno, por ejemplo. Sin embargo, es importante que asumamos que las medidas políticas incorporadas en nuestro programa pueden ser demasiado grises si no van acompañadas de un ideal, de un concepto o proyecto de país que sea el que sintetice tales ideas. Por eso es importante no quedarnos sólo en la plasmación concreta de las medidas en el programa sino ser capaces de integrar todas estas medidas en una idea de país que introduzca elementos emocionales y de esperanza. Este salto es muy importante e implica, a todas luces, un cambio de paradigma. Nuestro proyecto de país, republicano y federalista, debe ser capaz de sintetizar simbólicamente nuestras medidas. Para la ciudadanía nuestra propuesta republicana no puede ser sólo un largo programa de medidas concretas sino una esperanza o una idea que, cuando cristaliza, despliega esas medidas.

En concreto, nuestro concepto de país tiene que tener una vertebración nacional-popular, es decir, debe ser capaz de reconocer la importancia de las identidades nacionales construidas socialmente y que se siguen construyendo dentro del Estado-nación. **Tenemos que ser capaces de que nuestra propuesta política sea identificada con una República Federal que defiende un proyecto unitario para España desde la plurinacionalidad, y que reivindica como propia la construcción de un estado socialmente cohesionado en torno a las necesidades de las clases populares con independencia del territorio donde residan, como resultado de una alianza fraternal entre las clases populares de los distintos pueblos y naciones.** Esto es especialmente importante en tiempos de auge nacionalista, puesto que en la actualidad vemos contraponerse diferentes nacionalismos que, sin embargo, están en materia social y económica, por ejemplo, mucho más cerca de lo que pudiera parecer. Esta concreción debe desarrollarse aún más por parte de nuestra organización, aunque hemos tenido históricamente trabajos muy avanzados sobre ello, pero apunta con claridad a la defensa de una III República Española. Esta República no está planteada de forma nostálgica ni tampoco es entendida como un mero modelo de Estado abstracto, sino que es sobre todo un símbolo y significante de todo nuestro proyecto social. De ahí que entendamos que es absolutamente necesario seguir construyendo y consolidando esta idea.

Adoptando esta propuesta como horizonte, somos conscientes de que no hay soluciones fáciles y entendemos que nuestra acción política se debe adaptar al contexto político y la correlación de fuerzas de cada momento. Por este motivo entendemos que es necesario priorizar una solución política basada en 3 principios: a) búsqueda de amplias mayorías sociales y el máximo consenso entre las fuerzas políticas; b) el pronunciamiento democrático de la ciudadanía de Cataluña y c) la mejora del autogobierno y su defensa frente a cualquier proyecto centralizador.

Como hemos apuntado anteriormente, uno de los problemas que encontramos es que **nuestra capacidad de difusión ideológica es limitada aún**. Además de los problemas económicos de nuestra organización también enfrentamos una serie de restricciones adicionales como son la existencia de otros partidos políticos que reciben mayor atención mediática. En ocasiones esto directamente se traduce en que nuestra actividad queda invisibilizada. Este hecho no tiene por qué ser una conspiración, aunque todos los medios tienen obviamente un sesgo ideológico.

Ya en el informe anual de 2017 analizamos con detalle estas cuestiones relacionadas con la visibilidad mediática, y concluimos que lo que debíamos hacer es pasar a combatir estas restricciones de carácter estructural. La mejor forma de hacerlo es **mejorar nuestra capacidad de comunicar hacia dentro y hacia fuera, con mecanismos que, dentro de nuestro presupuesto, permitan hacer llegar mejor nuestro mensaje y acciones a la militancia y a la base social**. Aun queda mucho trabajo para conseguirlo, pero hemos avanzado en la construcción de «la comunidad» y esperamos poder tener pronto resultados concretos.

Por otra parte, pero muy vinculado a lo anterior, **nuestro trabajo en el conflicto social tiene que desplegarse haciendo uso de todas las infraestructuras que tenemos en la organización**. Debemos tratar de conseguir que nuestras sedes sean espacios de socialización de nuestra base, para lo cual podemos valorar, en función de las circunstancias, adaptarlas para nuevas funciones sociales (como asesoramiento para la reducción de precios de la energía o establecimiento de instrumentos para el ocio). Además, tenemos que **remarcar la importancia de las redes de activistas**, que integran a gran parte de nuestra militancia y que permiten trabajar de forma estratégica en los conflictos. Estas redes no sólo sirven para mejorar la capacidad de nuestra organización para incidir en la realidad sino que también son vectores de construcción de unidad popular.

Dentro de los instrumentos de difusión ideológica, o de batalla cultural, los cuales conectan con la idea de que nuestros valores y principios deben primero extenderse en la sociedad civil antes de que sea posible aspirar a ganar las elecciones, tenemos que maximizar nuestros recursos. En este sentido contamos con la *Fundación por la Europa de los Ciudadanos*, que debe reorientarse a este fin buscando cómo incrementar la capacidad de influencia dados los recursos limitados de que dispone. Tenemos que ser capaces de **usar el trabajo de la Fundación para crear nuevas redes que permitan incorporar a mucha gente nueva que comparte nuestro proyecto político pero que está actualmente dispersa**. Hablamos de trabajar en proyectos de movilización de trabajo cultural, algo no limitado ni mucho menos al ámbito de la producción investigadora o intelectual. En esa dirección trabajaremos también para relanzar con fuerza la revista cultural *LaU*.

Pero sobre todo **necesitamos incrementar nuestra presencia en el territorio por parte de los dirigentes de la dirección federal**. Aunque nuestra organización federal tiene recursos muy modestos, como hemos señalado, debemos ser capaces de orientar todos ellos a la presencia en nuestras federaciones. Ello ayudará para los objetivos electorales que nos hemos planteado, pero sobre todo permitirá que haya una comunicación más directa entre la militancia y los responsables políticos. Un elemento que se presenta esencial en estos momentos.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que no se trata de que nuestros dirigentes se desplieguen en el territorio para hablar de cuestiones internas, sino que tienen la misión de explicar y debatir las propuestas aquí apuntadas y otras emanadas de la XI Asamblea Federal. Se trata de **poner a punto la organización a través de un proceso organizado, consistente básicamente en el esquema siguiente**: 1) reunión con colectivos en lucha en el territorio, 2) entrevistas y contacto con la prensa, 3) asamblea con la militancia de IU para intercambiar reflexiones, 4) acto público y abierto a todo el mundo que nos permita explicar nuestra propuesta política.